

El conflicto armado en el país sudamericano

Frágil negociación en Colombia

Las inminentes conversaciones crean un marco fértil de paz, pero hay razones para el escepticismo

SALVADOR
Martí Puig



El anuncio del presidente **Juan Manuel Santos** de iniciar un proceso de diálogo entre el Gobierno de Colombia y las FARC ha sorprendido a la opinión pública internacional, ya que hace poco más de dos semanas esta misma organización declaró a **Santos** su enemigo público número uno y manifestó su voluntad de aliarse con quien fuera para eliminarlo.

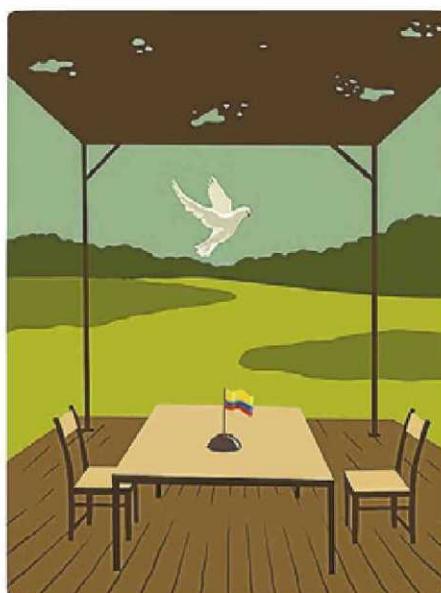
Si embargo, que el anuncio *sorprenda* no es una casualidad, sino una necesidad, ya que la apertura de un proceso de negociación debe prepararse con sigilo y cautela. Y en la misma lógica deben interpretarse las declaraciones altisonantes de las FARC y el recrudecimiento puntual de sus actividades, pues ambas son una demostración pública de la capacidad logística del contendiente antes de sentarse en la mesa de negociación.

PERO, MÁS ALLÁ del anuncio y la sorpresa, es importante comprender las razones por las cuales **Santos** ha apostado por repetir un proceso que hace poco más de una década terminó fatal, ya que desgastó al presidente que lo impulsó, **Andrés Pastrana**, dio visibilidad y recursos a la guerrilla, y polarizó la sociedad. La razón principal que da pie a la apertura de las negociaciones es la posibilidad de conseguir la desmovilización de las FARC y terminar con un conflicto enquistado que durante casi medio siglo se ha cobrado decenas de miles de muertos y que consume alrededor del 3%

del PIB anual. Conseguir la paz, sin embargo, va más allá de la voluntad de un líder, y para saber si vale la pena intentarlo es necesario ver –tal como se desgrana en lo que queda de artículo– cuáles son los recursos de los contendientes, las condiciones políticas y económicas del momento.

En cuanto a los recursos de los contendientes, es preciso señalar que las FARC se han debilitando militarmente durante la última década debido a los golpes asestados por la anterior administración del Presidente **Álvaro Uribe** con su política de «seguridad democrática». La estrategia militarista de **Uribe**, que contó con un generoso apoyo material y logístico de Washington, redujo la presencia de las FARC a las regiones sudorientales del país, eliminó parte de su comandancia y estranguló sus bases de apoyo.

Si embargo, esta política, basada en ganar la guerra, también terminó por debilitar al mismo Gobierno, ya que hizo uso de los paramilitares y del narcotráfico, a la par que violó de forma atroz los derechos humanos, tal como se ha demostrado con el escándalo de los falsos positivos. En este sentido, es preciso señalar que si bien las FARC van a entrar en el proceso de negociación sumidos en una relativa debilidad, saben que controlan una parte del territorio nacional rico en recursos naturales, que cuentan con la tolerancia de los gobiernos vecinos de Venezuela y Ecuador, y que las políticas béticas



LEONARD BEARD

Las élites colombianas han sido reacias a cualquier cambio que transforme el 'statu quo'

y punitivas desplegadas por el Estado tienen un límite.

Respecto al clima político, cabe apuntar la voluntad de **Santos** para desligarse de su anterior mentor y predecesor. Si bien **Santos** ganó las elecciones fungiendo como un continuista, al tomar posesión empezó a desligarse de **Uribe**, elaborando un abanico de leyes –como la ley de víctimas y la restitución de tierras– con las que se apropió de la agenda progresista. En este contexto, y con una parte importante de los aliados de **Uribe** pendientes de la justicia por su vinculación con el narco, **Santos** aparece como un interlocutor que puede sentarse a negociar con una guerrilla que ya no tiene (casi) nin-

gún apoyo entre la sociedad civil colombiana, y en unos términos más ventajosos que hace una década. Además, que **Santos** sea un representante directo de la élite tradicional y que tenga excelentes conexiones con los grandes inversionistas hacen de él un interlocutor autorizado.

FINALMENTE, en cuanto a las condiciones económicas, es fácil comprender que la guerra es –a la par de un vestigio del pasado– un lastre para el crecimiento y el desarrollo. La guerra en Colombia no solo drena cantidades ingentes de recursos materiales y humanos, sino que imposibilita que las grandes empresas transnacionales puedan operar y extraer recursos naturales en las ricas regiones del sur y del oriente. Esto es muy importante para el Gobierno, ya que ve cómo el conflicto guerrillero impide a Colombia aprovechar el boom internacional de las commodities.

Parece que las inminentes negociaciones se encuadrán en un marco especialmente fértil para la paz. A pesar de ello, hay tres razones que inducen al escepticismo. La primera es que un proceso negociador siempre es muy dilatado en el tiempo, y está lleno de altos y bajos, rupturas y retrocesos. La segunda es que las élites colombianas siempre han sido muy reacias a cualquier tipo de cambio que pudiera transformar el statu quo. Y la última es que más allá de lo que puedan pactar los dirigentes del Gobierno y de la guerrilla, una vez firmada la paz aún queda un largo y tortuoso camino para insertar a los combatientes y a las víctimas del conflicto de forma digna a la vida civil. ■

Profesor de Ciencia Política
de la Universidad de Salamanca.